

Chiapas

La independencia y la Revolución que llegaron tarde

Dr. Daniel Villafuerte Solís *

gasoda_2000@yahoo.com.mx

Dra. María del Carmen García Aguilar **

mcgarcia2005@yahoo.com.mx

RESUMEN

Este artículo sostiene la singularidad del estado de Chiapas en la historia de México. Su particular posición en la historia política, su pasado colonial vinculado a la Capitanía General de Guatemala y su anexión a México después de la Independencia, así como su notable ausencia en el movimiento de 1910-1920, marcó un particular estilo de relaciones sociales y desarrollo económico que condenó a buena parte de la sociedad, sobre todo a los campesinos e indígenas, a vivir en condiciones de exclusión social, pobreza y explotación, mismas que se hicieron evidentes con el levantamiento armado de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en enero de 1994. La carga del tiempo histórico se manifiesta hoy, a pesar de la Independencia, la Revolución y el levantamiento zapatista, en una profunda vulnerabilidad que se expresa en una sociedad rural en crisis, con alarmantes niveles de pobreza y un éxodo creciente a los Estados Unidos.

Palabras clave: Chiapas, crisis rural, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pobreza, migración.

Clasificación JEL: Z130.

* Los autores agradecen los comentarios y sugerencias de dos dictaminadores anónimos. Cualquier error u omisión remanente es responsabilidad exclusiva de los mismos. Profesor-investigador, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

** Profesora-Investigadora, CIESMECA –UNICACH. Integrante del Cuerpo Académico *Política, Diferencia y Fronteras*.

Fecha de recepción:
13 de abril de 2010
Fecha de aceptación:
1 de mayo de 2010

Introducción

A propósito del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana que con tanto despliegue publicitario se anuncia por parte del gobierno federal, al que se ha sumado el monopolio más importante de la televisión mexicana, Televisa, surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué tenemos que celebrar? ¿Somos un país con autodeterminación o, por el contrario, hemos pasado a depender de los Estados Unidos, no sólo económicamente sino también políticamente? ¿Las decisiones sobre temas fundamentales como los energéticos, la seguridad y los megaproyectos de integración se toman en la Casa Blanca o en los Pinos? ¿Somos hoy un país democrático y una sociedad fuerte, o por el contrario, somos una sociedad de contrastes, empobrecida, con grandes carencias y desigualdades, en medio de la cual unas pocas familias se han enriquecido? Los nubarrones de la crisis económica, del empleo y la inseguridad parecen ensombrecer las luces de los festejos oficiales que desde finales de 2009 han comenzado.

En este marco, este artículo plantea las particularidades que hoy tiene el estado de Chiapas, que se incorporó a México 14 años después de la Independencia, situación que marcó los rumbos de este territorio sureño olvidado de la federación, que hoy es visto con nuevos ojos, no tanto para transformarlo y “emparejarlo” con el desarrollo del resto de los estados del país, sino fundamentalmente porque constituye un espacio geopolítico de gran interés para el gobierno de los Estados Unidos, como contenedor de los males que amenazan la seguridad nacional de este país: narcotráfico, migraciones, crimen organizado.

El discurso de los gobiernos locales ha pregonado que Chiapas es el estado más mexicano, que por voluntad propia se incorporó a la República mexicana. Sin embargo, vale decir que la incorporación de Chiapas al resto del país es una historia que se forjó desde arriba, donde los actores regionales y locales no tuvieron mayor protagonismo que aceptar las negociaciones entre las cúpulas del poder económico y político. Cada año, el 14 de septiembre, el gobierno de la entidad conmemora la federación de Chiapas a México, antes se decía “anexión”, un término que revela con mayor realismo la situación de Chiapas en el concierto nacional. En el 2009 se celebró el 185 aniversario, como en todas las ocasiones, y esta no fue la excepción, el discurso oficial se refirió a los rezagos estructurales de la entidad y los retos que habrá que enfrentar.

Por otra parte, hay consenso entre los historiadores en el sentido de que la Revolución Mexicana no llegó a Chiapas (véase Benjamin, 1990; García de León, 1994; Gutiérrez, 2004, García, 2005). Por el contrario, lo que se produjo fue una contrarrevolución que dejó intacta las estructuras económicas y sociales. Este acontecimiento marcó en definitiva el devenir histórico de la entidad, como un estado de fuertes contrastes que se expresan en todos los ámbitos de la vida material y

cultural. En el presente, Chiapas se está emparejando con el resto del país en sus aspectos más negativos: presencia del crimen organizado, trata de personas, narcotráfico, migración internacional, etc. La pobreza que ha sido una constante en la estructura de la sociedad se mantiene sin cambios. A pesar de toda la retórica oficial, los niveles de marginación y el grado de desarrollo humano, que es la nueva forma de medición del subdesarrollo, se mantienen en los niveles más bajos del país. En los municipios donde la mayoría de la población es campesina o indígena la pobreza aparece con renovada presencia.

Hace casi una década sostuvimos la tesis según la cual Chiapas estaba condenado al subdesarrollo, que parecía ser víctima de una especie de maldición bíblica pues desde su anexión a México, en 1824, no había podido alcanzar los niveles básicos de ingreso, alimentación, educación y salud (Villafuerte, 2001). Esta afirmación sigue siendo válida a pesar de todos los acontecimientos ocurridos desde entonces: casi dos sexenios de gobiernos perredistas, notable incremento de la inversión pública y el levantamiento armando del Ejército Zapatista de Liberación no han sido suficientes para cambiar los rumbos de la historia que comenzó en 1824 y que se terminó de perfilar con la contrarrevolución “mapachista” de 1914. Esta es la idea central que sostenemos en este artículo a partir de la situación social, económica y política de los años recientes.

La ilusión del 94. La segunda revolución que no prosperó

El 1 de enero de 1994, justo el día en que entró el vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ocurre el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La reacción del gobierno federal fue el envío de tropas a Chiapas para sofocar la rebelión, se llegó a manejar la cifra de 70 mil efectivos del Ejército Mexicano. La sociedad civil se movilizó para detener el enfrentamiento y a los 12 días de conflicto armado el gobierno federal declara de manera unilateral alto al fuego. Luego vinieron los diálogos de la Catedral y más tarde las negociaciones en las llamadas mesas de San Andrés, pero los acuerdos no llegaron a concretarse en las leyes mexicanas (Villafuerte y Montero, 2006). Desde entonces no hay comunicación oficial entre la guerrilla y el gobierno federal. Después de un largo silencio, en 2005 el EZLN declara la alerta roja, pronuncia la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y anuncia que a partir de enero de 2006 iniciaría una movilización por todo el país bajo el lema de “La Otra Campaña”. Hasta hoy no se ha realizado una evaluación de los resultados de las movilizaciones del EZLN por todo el territorio nacional, sin embargo, lo que resulta revelador es que en 2009 y 2010 las conmemoraciones del alzamiento zapatista no tuvieron la fuerza mediática que presentaron en el pasado.

Desde la fracasada *Ley Cocopa* el EZLN concentró sus esfuerzos en

la construcción de la “autonomía”, un proyecto que se venía perfilando desde los comienzos del levantamiento armado. A dieciséis años de distancia es válido preguntarse si la autonomía va y si es un modelo viable no sólo para los indígenas zapatista de Chiapas sino también para otras regiones de México. Esta es una pregunta compleja que requiere tener una serie de elementos empíricos, además de conocer a fondo el proyecto que está detrás del impulso de los procesos autonómicos. Ruiz y Burguete se preguntaban en el 2003: ¿Son viables los regímenes de autonomía en las regiones indígenas? La respuesta fue: “hasta hace solamente diez años la posibilidad de la autonomía indígena gozaba de poca simpatía y, más bien, en su momento fue ampliamente incomprendida y hasta condenada” (2003:64) ¿Es pertinente formularse la misma pregunta en el 2010, en el marco de la conmemoración del centenario de Revolución Mexicana?

En lo últimos años la idea de autonomía se ha popularizado, incluso en otros países de América Latina. Es el caso de sectores de clase media y empresarial de Bolivia que han declarado la autonomía de la región de Santa Cruz, como respuesta al proyecto impulsado por el presidente Evo Morales que goza de amplio respaldo en los sectores indígenas y campesinos de ese país andino. En el caso de México, la idea de autonomía, en sus diversas versiones, que va desde la coexistencia con estructuras y programas gubernamentales, hasta planteamientos más radicales como es el caso del zapatismo, donde hay un esfuerzo genuino por cambiar las relaciones sociales al interior de las comunidades y su vínculo con el exterior, el proceso puede ser más o menos complejo, dependiendo del grado y de sus fines últimos. El proyecto zapatista es el más complejo, es una visión de largo aliento que tiene detrás un proyecto político anticapitalista y anti neoliberal. Aquí reside la principal dificultad de su construcción, no sólo por tener un contexto nacional e internacional desfavorable sino también por enfrentar la oposición de grupos indígenas que no simpatizan con la causa zapatista y con sus estrategias.

Se sabe poco del funcionamiento real de los municipios autónomos, la literatura sobre la autonomía zapatista no aporta elementos de juicio sobre sus tensiones y avances, se limita en muchos de los casos a tomar posición a favor o en contra. Sin embargo, se puede decir que es un modelo de organización social y política que corresponde a una lógica comunitarista, que en el ámbito económico parece tener poca consistencia y esto es precisamente el Talón de Aquiles del proyecto pues uno de los ejes fundamentales para hacer viable todo proceso autonómico es la base material que permita autocentrar la reproducción económica y social.

¿Qué han ganado las comunidades a partir del levantamiento zapatista? ¿Cómo podemos medir el grado de autonomía? ¿Cuáles son sus indicadores de bienestar? ¿La construcción de la autonomía está libre de tensiones y conflictos? ¿La autonomía ha logrado más

adherentes? ¿El modelo se ha logrado replicar en otras regiones de Chiapas y fuera del estado? Estas son algunas interrogantes que suscitan hablar de autonomía zapatista, que entendemos como un proceso complejo y de largo aliento.

Los zapatistas han concentrado sus esfuerzos en la construcción de la autonomía, dirigido fundamentalmente en los ámbitos de la educación y la salud. Se trata de una educación alternativa a los programas oficiales, que incorpora la cultura local y las dimensiones política, ideológica y económica, con respeto a la diversidad de lenguas (Antón, 2008). Este proceso no ha estado exento de dificultades, tanto en el terreno de los recursos humanos y financieros como de un entorno tenso no sólo por la presencia de las fuerzas armadas, sino también por el trabajo de las instituciones gubernamentales y las propias organizaciones sociales que cohabitan en los territorios de influencia zapatista y disputan los recursos, principalmente la tierra y el agua.

La tierra es un recurso crítico para la sobrevivencia: en los primeros años del movimiento zapatista fueron invadidas muchas propiedades particulares, que fueron repartidas y trabajadas en colectivo. Sin embargo, en los últimos años, frente a la falta de definición jurídica por parte de los gobiernos federal y estatal, las tierras en manos de las bases de apoyo zapatista han comenzado a ser disputadas por grupos de campesinos de distinta filiación política, más cercana a posiciones oficiales.

El enemigo interno más visible de los zapatistas son las organizaciones que no simpatizan con el proyecto zapatista y que cuentan también con sus bases de apoyo. Una de estas es la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), creada en 1998 y que el 8 de marzo de 2008 el gobierno de Chiapas detuvo a 26 de sus miembros. Otra agrupación es la Organización Regional de Cafecultores de Ocosingo (ORCAO).¹

En el ámbito local el EZLN trabaja en el proyecto de autonomía, y en el nacional e internacional concentra sus esfuerzos en la acumulación de esfuerzos de izquierda, cuyo referente actual es la

¹ Algunos ejemplos recientes de las tensiones entre zapatistas y las organizaciones citadas son los siguientes: el 5 de enero de 2009 bases de apoyo del EZLN se enfrentaron con militantes de la ORCAO con saldo de 5 heridos, los hechos ocurrieron en el ejido Abasolo donde los zapatistas pidieron que les fuera restituído un predio de 500 hectáreas que les pertenece (*La Jornada*, 6 de enero de 2009); el 9 de enero se reporta el enfrentamiento entre zapatistas y campesinos de la organización COCICEL por la disputa de un predio llamado "Agua Azul, localizado en la cañada de Taniperlas, el saldo fue de al menos 15 heridos (Notimex, 9 de enero de 2009); el 2 de febrero la ORCAO denuncia que bases de apoyo zapatista incendiaron cinco viviendas en las inmediaciones del nuevo centro de población Jetjá, en el municipio de Ocosingo (*Cuarto Poder*, 2 de febrero de 2009). Elio Henríquez y Ángeles Mariscal del diario *La Jornada* (8 de febrero de 2010) reportan que el día 7 de febrero de 2010 "al menos cuatro indígenas resultaron heridos de bala y ocho más con armas punzo cortantes (uno de ellos de gravedad) durante la riña entre bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) por la posesión del predio Bolón Ajaw".

Sexta Declaración de la Selva Lacandona y La Otra Campaña. La autonomía se construye en medio de muchas carencias materiales y de un contexto económico y sociopolítico definido por las relaciones de mercado y del dinero.

Al cumplirse casi cuatro años de la *Sexta Declaración de la Selva Lacandona* (13 de julio de 2005) –*la otra campaña* cumplió tres años en 2009–, se reconocen avances pero también las carencias: “Se ha mejorado la salud y la educación aunque todavía falta un buen tanto para ser lo que deber de ser, igual con la vivienda y la alimentación, y en algunas zonas ha mejorado mucho el problema de la tierra porque se repartieron las tierras recuperadas a los finqueros, pero hay zonas que siguen sufriendo por falta de tierras para cultivar”. Esto evidencia que los problemas estructurales no son fáciles de resolver, la ausencia de una base material sólida constituye un grave obstáculo para construcción de la autonomía. A quince años del levantamiento armado, el comandante David señaló: “Nuestras autoridades han tratado de resolver los problemas de nuestros pueblos y algunas de las múltiples necesidades de nuestras comunidades, pero la gran parte de nuestras necesidades siguen sin soluciones. El hambre, la miseria y las enfermedades van aumentando día con día” (*La Jornada*, 2 de enero de 2009).

La crisis que dejó al descubierto la pobreza y la desigualdad

A partir de la década de los noventa la crisis rural en el sur de México, y de manera particular en Chiapas, alcanzó niveles de profundidad que prácticamente desestructuró las instituciones básicas como la familia y la comunidad. Es una crisis de la producción rural, del sistema agrario y de las organizaciones campesinas, una crisis profunda que trastoca los valores fundamentales de cohesión social, de la solidaridad y de las relaciones presenciales. Esta crisis que se venía gestando años atrás adquiere dimensiones profundas con la puesta en marcha de un paquete de medidas económicas de corte neoliberal –en las que se incluye la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)– que generan impactos irreversibles en el campo y en las economías campesinas, presionando a las organizaciones a la búsqueda de alternativas centradas en sus propios esfuerzos y recursos. El movimiento social, en particular el levantamiento zapatista, no logró que las políticas neoliberales al menos fueran revisadas a fin de atender los problemas más urgentes de las familias campesinas, por el contrario tales políticas se han venido profundizando con un enorme costo social.

Un estado como Chiapas, cuya población es mayoritariamente rural, resulta altamente vulnerable frente a la apertura comercial y la desregulación económica toda vez que se produce un cambio en la política económica y social, que reduce los subsidios, los créditos, los apoyos en la comercialización y la asistencia técnica. En una palabra, los productores, sobre todo los del sector social, quedan

desprotegidos frente al mercado que se rige por las reglas impuestas por los monopolios.

La crisis rural alcanzó un punto de inflexión en enero de 1994 al conjuntarse tres fenómenos: 1) el levantamiento armado del EZLN; 2) la entrada en vigor del TLCAN, que presupuso una serie de reformas legales, entre las más importantes la reforma al artículo 27 Constitucional en materia agraria; y 3) la caída de los precios de los principales productos destinados a los mercados nacional e internacional: café, plátano, cacao, entre otros.

La crisis de precios de los productos agrícolas, los conflictos agrarios propiciados por el levantamiento zapatista y la crisis financiera de finales de 1994 propiciaron una caída brutal del valor real del PIB del sector primario (-5.4 por ciento en 1994, -3 por ciento en 1995 y -1.3 por ciento en 1996, con relación a 1993). A partir de 1997 se inicia una lenta recuperación, pero sin alcanzar los niveles de crecimiento registrados en la década de los ochenta. De hecho, en los últimos años hemos visto crecer el campo a un ritmo mucho menor.

Más allá de la caída del PIB sectorial, la naturaleza de la crisis rural es estructural y tiene que ver con la obsolescencia del modelo productivo basado en cultivos básicos, plantaciones comerciales y la práctica de una ganadería bovina extensiva que genera muy pocos empleos. El modelo de ganadería extensiva empresarial se trasladó al sector campesino, a través de la explotación directa por la vía de la reconversión productiva de áreas de maíz a pastizales y mediante la renta de las tierras ejidales a pequeños propietarios.

El comportamiento de la crisis tiene diversos caminos, uno de ellos se manifiesta en el éxodo de indígenas y campesinos hacia las ciudades de Chiapas, a las entidades de la frontera norte y a Estados Unidos. Otro tiene que ver con la caída de los rendimientos de los principales cultivos, sobre todo de granos básicos, que siguen teniendo la mayor importancia para los campesinos por la ocupación de tierras, el empleo de mano de obra y la alimentación.

En el contexto de la crisis, la estructura agraria sufre un cambio importante frente a la fuerza del movimiento campesino, que en el contexto del levantamiento del EZLN realiza una serie de invasiones a propiedades privadas. El resultado fue el reparto de tierras a una gran cantidad de campesinos por vía de las compras de tierras a propietarios, que en su mayoría habían sido invadidos. Para decirlo en otras palabras, se produce en Chiapas un fenómeno de recampesinización. Sin embargo, el problema de la crisis agraria y agropecuaria no se resuelve con la transferencia de tierras. Sencillamente porque el nuevo contexto de apertura comercial y de políticas hacia el campo tienen profundas implicaciones en la producción y en la vida de los productores. Y sin embargo, la tierra sigue siendo tema central en Chiapas.

En el problema de la tierra hay por lo menos tres fenómenos que se articulan: 1) la existencia de organizaciones campesinas que

siguen reivindicando el derecho a la tierra, 2) la necesidad real de tener un pedazo de tierra frente al crecimiento de la población rural y la falta de empleo, y 3) la conflictividad agraria no es el resultado de la indefinición jurídica que se expresa en la ausencia de títulos de propiedad y en la precisión de límites entre municipios y ejidales, sino de la ausencia de un modelo económico que resuelva el problema del empleo y de las aspiraciones de la gente del campo.

Hasta el 2006 casi el 62 por ciento de las tierras en Chiapas estaban en manos de los campesinos, mientras que la propiedad privada equivale a 2 millones 44 mil hectáreas. Sin embargo, la conflictividad agraria sigue presente. A pesar de que la migración de chiapanecos a Estados Unidos, a los estados de la frontera norte y al Caribe mexicano, se convirtió en un factor decisivo de distensión en el campo chiapaneco, la demanda agraria y los conflictos por la disputa de tierra ocupadas durante los años del movimiento zapatista, continúan: el subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría del Campo del gobierno de Chiapas, declaró que 894 grupos de campesinos han solicitado a la Secretaría de la Reforma Agraria la entrega de 193 mil 63 hectáreas. El funcionario aseguró que la conflictividad agraria alcanza las 181 mil 511 hectáreas (*Expreso Chiapas*, 16 de abril de 2008). Esta es una cantidad equiparable a la superficie comprada por la autoridad agraria federal para solucionar el problema de las invasiones que ocurrieron al calor del levantamiento zapatista.

La Secretaría de la Reforma Agraria constituyó el programa denominado Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) y en este marco se formó en Chiapas un grupo especial para atender todo tipo de denuncias. Sin embargo, el delegado de esa dependencia en Chiapas aclara que la “Reforma agraria ya no adquiere predios, propiedades, lo que hacemos nosotros es dar una contraprestación a aquellas personas que ya sea quieran desocupar una superficie o bien aquellos propietarios que quieran dejar una superficie, es una contraprestación” (*Cuarto Poder*, 6 de enero, 2009).

Actualmente, hay por lo menos tres conflictos agrarios que sobresalen en el Chiapas rural de fines de la primera década del siglo XXI: el conflicto entre Chalchihuitán y Chenalhó, cuyo enfrentamiento ha costado ya un muerto; en este conflicto, considerado como foco rojo por la Secretaría de la Reforma Agraria, involucra a 800 hectáreas y una población de 3,568 personas. Asimismo, aparecen los conflictos en el municipio de Venustiano Carranza que implica la disputa por 1,187 hectáreas y el de Nicolás Ruíz que involucra a tres municipios y 785 hectáreas. Finalmente, destaca el asunto de la Comunidad Lacandona, un problema complejo, que aunque aparece como una disputa agraria en realidad está revestido de un componente geopolítico relevante, en el que hay diversos actores entre los que destacan bases de apoyo del EZLN. De acuerdo con la Secretaría de la Reforma Agraria, este conflicto tiene poco más de 33 años, la superficie disputada es

de 118,387 hectáreas y el número de sujetos es de 3,584. Pese a las declaraciones triunfalistas de la administración del gobernador Pablo Salazar (2000-2006), el conflicto todavía está lejos de resolverse, a mediados de 2008 la Reforma Agraria reportó un avance de poco más del 50 por ciento (Véase Ascencio, 2008). A estos casos habrá que agregar las invasiones en la zona de influencia zapatista, las disputas de tierras entre bases zapatistas y grupos antagónicos en puntos de gran valor escénico como es el caso de Agua Azul.

La reforma agraria prácticamente termina en el año 2000 con la “ejidalización” de las tierras entregadas a los campesinos vía compra a propietarios privados que fueron invadidos en los años 1994-1996. Aun así, la cuestión agraria en Chiapas, a cien años de la Revolución Mexicana, sigue siendo un tema sensible debido al desfase histórico y a la falta de opciones de empleo en otros sectores de la economía.

Con la entrada en vigor del TLCAN, la crisis del campo se profundizó. La reducción de los apoyos gubernamentales al campo, así como la reestructuración de las instituciones dedicadas al fomento de la producción agropecuaria, devino en una crisis del campo y de los campesinos. En muchos casos, vender la parcela o rentarla ha significado la posibilidad de tener un ingreso para emigrar a los Estados Unidos. La tierra dejó de ser un factor de arraigo para los campesinos y se convirtió, en algunas regiones, en una mercancía que puede ser vendida. Para el caso de Chiapas, si bien la tierra no se ha privatizado² ha dejado de ser la principal fuente de recursos, hoy es complementaria a los ingresos generados por la migración a Estados Unidos, el trabajo asalariado y la economía informal en los centros urbanos.

La apertura del mercado, y en particular las importaciones de granos básicos, ha hecho cambiar la geografía de la producción. Las áreas antes fuertemente productoras se han convertido en tierras para el ganado bovino y en zonas de expulsión de migrantes. Aunado a la apertura, el deterioro de las tierras de cultivo, la falta de apoyos gubernamentales a la producción hacen que los campesinos jóvenes centren sus expectativas en la migración hacia Estados Unidos.

El campo no es una alternativa para el campesino frente a un entorno macroeconómico de apertura comercial y de reducción sustancial de los programas de apoyo al campo. Hoy las remesas de la migración están ocupando el lugar que tenía la parcela en la reproducción de la familia. La pérdida de capital humano para el país, el desarraigo, el alto nivel de riesgo que significa cruzar la frontera y buscar empleo en Estados Unidos, son algunos costos asociados a la migración, que por cierto no entran en la elaboración de las Cuentas Nacionales.

Los defensores del TLCAN, los que sostienen que no es posible y necesaria la renegociación del capítulo agropecuario, argumentan

² El Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), cuyo objetivo, en última instancia, era convertir la tierra ejidal en una mercancía, ha marchado con un gran rezago con respecto a otras entidades del país.

que México ha ganado con la apertura comercial. El fundamento es que el país mantiene un superávit comercial con Estados Unidos y es beneficiario de mayor inversión extranjera directa. Sin embargo, es necesario preguntarse quiénes se han beneficiado con la apertura de los mercados: en 2004 las exportaciones totales sumaron 187,998.6 millones de dólares, de los cuales 46.25 por ciento correspondió a la industria maquiladora y 11.3 por ciento a las exportaciones de petróleo crudo; en otras palabras, casi 58 por ciento del valor de las exportaciones dependen de las maquiladoras y del petróleo. En el 2006, las cifras del Banco de México reportan 249,997.2 millones de dólares por concepto de exportaciones totales, donde la industria maquiladora contribuyó con el 44.7 por ciento y el petróleo con 13.9 por ciento, es decir, en este año nos acercamos al 59 por ciento del valor de las exportaciones concentrados en dos sectores.

Por otra parte, el TLCAN ha generado una creciente dependencia alimentaria que vulnera la soberanía del país y genera la ruina de los productores con menos tierras y escasez de recursos financieros: el déficit en la balanza comercial agroalimentaria creció en 263 por ciento, al pasar de 1,161 millones de dólares en el año 2000 a 4,222 millones de dólares en 2007 (Siap-Sagarpa, 2009). En medio de un proceso de crisis energética, los granos básicos se han convertido en una fuente generadora de combustibles. Sin embargo, esto no hace más que agravar la crisis rural, pues se traduce en un incremento en el nivel de precios. La dependencia, como ya se vio en el 2007, generó un fuerte problema al incrementarse los precios del maíz ante el uso de este grano para producir biocombustibles en Estados Unidos.³

Con el TLCAN se ha duplicado la importación de cereales. El incremento de los precios del maíz ha hecho que el valor de las importaciones de este grano se haya incrementado en más de tres veces, entre 1994 y 2006. En el periodo 2004-2008 observaremos que el costo de las importaciones de este cereal se multiplicó por cuatro ya que en el último año se rebasó los 2 mil millones de dólares. En 2008 se importó poco más de 9 millones de toneladas de maíz, con valor de 2,391.4 millones de dólares, una cantidad superior en más de 6 veces a lo importado en 1994.

³ Desde 2003 se viene presentando en el país un déficit de aproximadamente 7 millones de toneladas para satisfacer la demanda industrial y pecuaria. La producción nacional es de aproximadamente 22 millones de toneladas, de las cuales 15 millones se producen en terrenos de temporal y sólo para la elaboración de las tortillas se consumen alrededor de 11 millones, lo cual supondría autosuficiencia. Sin embargo, la demanda de la industria pecuaria (cerdos, ganado vacuno y aves) ha aumentado el consumo de maíz blanco producido en México porque el precio del maíz importado (amarillo) sufrió un incremento de aproximadamente 40% en 2005. A esto hay que agregar que en el mismo año se consumieron 39 millones de toneladas de maíz de los 300 millones que produce Estados Unidos, para la producción de energéticos y se espera que para el 2012 se transformen 70 millones de toneladas de maíz, para producir 28 millones de litros de bioetanol (Villafuerte, 2007).

Política agrícola y des-movilización campesina

El movimiento zapatista no provocó cambios en la política agraria y agrícola. Las reformas al artículo 27 Constitucional en materia agraria no sufrieron la más mínima modificación. Las invasiones de más de 200 mil hectáreas que se produjeron en los años 1994-1996 fueron resueltas mediante la compra de tierras a los propietarios privados, que a través de la constitución de fideicomisos fueron adquiridas y entregadas en copropiedad a los campesinos, con la intermediación de sus respectivas organizaciones (Villafuerte, *et al*, 2002).

Más allá de la entrega de parcelas, la política agrícola no se modificó. Por el contrario, se siguió alentando una estructura productiva basada en tres cultivos: maíz, frijol y café. Los dos primeros orientados al mercado nacional y al autoconsumo, y el tercero al mercado nacional y la exportación. Estos tres cultivos ocupan más del 80 por ciento de la superficie agrícola y generan el mayor número de empleos.

Así mismo, a pesar de los debacle de los precios internacionales del café, que ocurrió a mediados de 1989, con impactos dramáticos en la economía de los productores y sus familias –considerado en algunos países productores como un asunto de seguridad nacional por cuanto podría traducirse en fuertes presiones sociales que desbordarían a las instituciones–, se registra una tendencia al crecimiento de la superficie cultivada del orden del 16 por ciento entre los años 1994-2007. Esta situación estaría revelando que los productores no pudieron encontrar opciones productivas para reconvertir las áreas cafetaleras hacia otros cultivos de mayor rentabilidad y también muestra la incapacidad de los gobiernos estatal y federal para cambiar la política económica con miras a inducir un cambio en el patrón productivo. Además, la crisis del café constituyó uno de los factores de mayor peso en el desarrollo y consolidación de los flujos migratorios de chiapanecos y veracruzanos a Estados Unidos. Hoy Chiapas y Veracruz son los estados del sur más dinámicos en cuanto a flujos migratorios hacia Estados Unidos.

Caso contrario ha ocurrido con la producción de granos básicos (maíz y frijol). La superficie cosechada de maíz cayó en 5.7 por ciento en el periodo 1994-2007, pero en los últimos años los datos son aún más inquietantes entre 2004 y 2007 la frontera maicera se contrajo en 23.2 por ciento, es decir se dejó de cultivar poco más de 200 mil hectáreas.

La Sagarpa confirma la baja tendencial en la superficie sembrada de maíz en 2008 con implicaciones significativas en el volumen de la producción. La superficie cosechada para ese año fue de 598,270 hectáreas y la producción 1, 176,569 toneladas. Esto significa una reducción del orden del 30.6 por ciento en la superficie con relación al año 2004 y una disminución de la producción del 13 por ciento.

Sin duda alguna, uno de los cambios más importantes en la agricultura chiapaneca ha sido la geografía de la producción de

maíz, que en los últimos 25 años ha cambiado sustancialmente. La apertura comercial y las políticas agrícolas han inducido cambios en el comportamiento de la producción, de manera que los antiguos municipios productores, donde los campesinos medios constituían el sector más dinámico, como son Ángel Albino Corzo, Cintalapa, Jiquipilas, Tapachula, Villa Corzo y Villa Flores, han dado paso a nuevos municipios constituidos por campesinos de subsistencia y de autoconsumo. En 1981, estos seis municipios aportaban 40.2 por ciento de la producción de maíz en Chiapas y en 2006, a 25 años de distancia, sólo contribuyeron con 17.6 por ciento de la producción estatal. El maíz deja de ser rentable y las tierras son abandonadas por los campesinos que emprenden el viaje a Estados Unidos en busca de trabajo. En seis años, la superficie maicera se redujo en 54 por ciento, mientras que el ganado bovino aumentó en casi 20 por ciento.

Las estadísticas oficiales indican que Chiapas aportó en el 2006 alrededor del 7.23 por ciento a la producción nacional de maíz, con casi 1.6 millones de toneladas. Estas cifras colocan a la entidad en el cuarto lugar en el conjunto de las entidades federativas. Sin embargo, ha quedado muy rezagado con respecto a estados como Sinaloa, Jalisco, El Estado de México, incluso Guerrero, situación que contrasta con años anteriores al TLCAN. Chiapas y Veracruz, los estados con mayor flujo migratorio a Estados Unidos, presentan una dramática disminución en la producción de maíz.

En lo que respecta a la superficie cosechada de frijol se observa una tendencia creciente entre 1994 y 2004; sin embargo, a partir del último año se registra una caída del orden del 9.6 por ciento, que bien podría interpretarse como parte de la tendencia al abandono de producción de alimentos básicos frente a la falta de apoyos gubernamentales en un entorno de apertura comercial.

Por otra parte, en el campo se están dando cambios significativos en el ámbito de la organización de la producción. El mercado y las políticas de corte neoliberal han permitido un giro en la concepción de las organizaciones que ahora están preocupadas en la producción y en la búsqueda de estrategias para aumentar sus ingresos, abandonando los ámbitos de la organización social, política y cultural (es el caso de los productores de café, de los floricultores y quienes están impulsando proyectos de ecoturismo en la zona de la Selva). Se camina hacia un aprendizaje de corte empresarial, sobre todo en proyectos turísticos o eco-turísticos y de producción de café, donde el gobierno otorga apoyos en infraestructura, subsidios y otros apoyos, pero también donde se registra participación de empresas transnacionales como Starbucks en la comercialización del café, aprovechando la organización de los productores como ocurre en ciertas zonas de la Sierra.

Migración y pobreza como expresión de la crisis

La migración de la población joven dentro y fuera del país, así como la profundización de la pobreza son expresiones inequívocas de la crisis que afecta al campo. No hay datos precisos pero existen evidencias empíricas sobre el incremento de los flujos migratorios, que puede verse reflejado en el incremento de las remesas familiares. Encontramos, por ejemplo, un dato muy interesante generado por el Censo Agropecuario 2007 y IX Censo Ejidal publicado en 2008, que revela que la mayoría de los jóvenes en 500 ejidos y comunidades de Chiapas (poco más del 20 por ciento del total) se han marchado: en 141 han emigrado hacia áreas urbanas del país y en 282 hacia Estados Unidos, el resto (77) hacia áreas rurales del país. La cifra puede aumentar con la reciente crisis económica. La migración de jóvenes es aún más grave en los estados de Guerrero y Oaxaca: en el primero alcanza casi 49 por ciento de las localidades y en el segundo es de poco más de 43 por ciento (cuadro 1).

Cuadro 1
Ejidos y comunidades totales y sin permanencia de la mayoría de los jóvenes según lugar de destino

Estado	Total ejidos y comunidades	Número de ejidos y comunidades sin permanencia de la mayoría de los jóvenes	Dentro del país	A EE.UU.	A otro país
Nacional	28,541	12,997	4,175	8,805	17
Chiapas	2,495	500	218	282	----
Guerrero	1,087	531	63	457	1
Oaxaca	1,474	637	213	423	1

Fuente: INEGI Censo Agropecuario 2007, IX Censo Ejidal, 2008.

La migración en Chiapas es un fenómeno que también abarca zonas zapatistas. Con o sin permiso del EZLN los jóvenes abandonan sus comunidades en busca de ingresos. Se sabe que la organización no concede permisos para irse a Estados Unidos. Rigo, un indígena tzeltal base zapatista, refiere que los gobiernos autónomos solo dan un máximo de quince días al militante zapatista para que salga a trabajar a otro estado del país. De preferencia no debe salir: hay que construir un mundo diferente desde la propia tierra o el lugar donde se vive (Sánchez, 2007). Sin embargo, la pobreza constituye el principal incentivo para que la población salga de sus comunidades.

Una de las razones que motivaron el levantamiento zapatista fue la situación de pobreza. La realidad actual no ha cambiado sustancialmente, Chiapas mantiene el mismo lugar en Desarrollo Humano en el conjunto de las entidades del país, es decir, el último. Como se puede

observar en el cuadro 2, Chiapas es, junto con Guerrero y Oaxaca el que tiene mayor población en los tres ámbitos de la pobreza: alimentaria, de capacidades y de patrimonio. Esta situación se profundiza en las áreas rurales e indígenas.

Cuadro 2
Estimación de la población en pobreza nacional y estados seleccionados, 2005
(Cifras absolutas)

Entidad federativa	Población Total (miles de personas)	Población en miles de personas	Pobreza de capacidades	Pobreza de patrimonio
Nacional	103,263	18,954	25,670	48,896
Chiapas	4,293	2,018	2,399	3,248
Guerrero	3,115	1,309	1,563	2,187
Oaxaca	3,507	1,338	1,645	2,385

Fuente: Estimaciones del CONEVAL, con base al Censo de Población y Vivienda, 2005.

A 16 años del levantamiento armado los niveles de pobreza y marginación de la población chiapaneca y en particular indígena siguen siendo muy altos. En la lista de los 20 municipios más pobres y marginados de México 11 (55 por ciento) se encuentran en Chiapas, todos con población mayoritariamente indígena: Santiago el Pinar, San Juan Cancuc, Chanal, Chalchihuitán, Oxchuc, Tenejapa, Huixtán, Aldama, Pantelhó, Tumbalá y Larraínzar. La pobreza alimentaria de estos municipios afecta la mayoría de la población, que va en un rango de entre 84 y 78 por ciento (véase CONEVAL, cuadro 3), que en números absolutos equivale 176,600 personas.

Cuadro 3
Estimación de la población en pobreza nacional y estados seleccionados, 2005
(Cifras relativas)

Entidad	Población total	Porcentaje de la población total		
		Pobreza alimentaria	Pobreza de capacidades	Pobreza de patrimonio
Nacional	100.00	18.35	24.85	47.35
Chiapas	100.00	47.00	55.88	75.65
Guerrero	100.00	42.02	50.17	70.20
Oaxaca	100.00	38.15	46.90	68.00

Fuente: Estimaciones del CONEVAL, con base al Censo de Población y Vivienda, 2005.

Por otra parte, encontramos una correlación positiva entre crisis agrícola –en particular de la agricultura campesina de subsistencia–, la pobreza y el incremento de las remesas. Además, hay otro elemento que puede verse como el reflejo de la precariedad de las condiciones materiales y la pobreza, que es justamente la existencia, en estos estados del sur de México, de importantes movimientos sociales: Guerrero es origen de la guerrilla en los años setenta, que luego se transformó en lo que hoy se conoce como Ejército Popular Revolucionario (EPR) y que estuvo presente en el levantamiento zapatista; en Oaxaca tiene su asiento el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que agrupa a más de 30 organizaciones; y en Chiapas el conocido Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) surgido el 1 de enero de 1994.

La migración y las remesas actúan una válvula de escape y han sido un factor de desmovilización social. Podemos ver una correspondencia entre el crecimiento de las remesas y el relajamiento del movimiento social y campesino, salvo en el caso de Oaxaca protagonizado por los maestros en la APPO. Por lo demás, en Chiapas durante los últimos ocho años no se han dado conflictos de carácter regional o estatal, aunque encontramos algunos en ámbitos muy localizados.

Cuadro 4
Remesas familiares en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, 2004-2008

Estado	2004	2005	2006	2007	2008
Chiapas	500.3	655.3	807.6	906.6	800.1
Guerrero	826.3	957.4	1,157.4	1,418.6	1,401.9
Oaxaca	804.0	1,002.2	1,198.1	1,420.7	1,456.9
Total	2,130.6	2,614.9	3,163.1	3,745.9	3,658.9
Nacional	16,612.9	20,034.8	23,053.75	26,075.9	25,144.5
% respecto al total nacional	12.82	13.05	13.72	14.36	14.55

Fuente: Banco de México. Sector externo

Es interesante observar la relación entre la producción de granos básicos y las remesas. Entre 2004 y 2008, contrariamente a lo que ocurre con la producción de maíz, se registra una tendencia al incremento de las remesas. En el caso de Chiapas hay un salto espectacular en el monto de los envíos, como se puede apreciar en el cuadro 4, al registrar un aumento de poco más del 80 por ciento entre 2004 y 2007. Asimismo, los estados de Guerrero y Oaxaca, que junto con Chiapas conforman el triángulo de la pobreza extrema en México, experimentan un incremento superior al 70 por ciento.

Sin embargo, a partir de 2007, en un contexto de recesión económica en Estados Unidos, comienza una tendencia a la baja en los *migradólares*, de manera que entre 2007 y 2008 se produce una dis-

minución en el rito de crecimiento en el ámbito nacional y en varios estados ocurre una caída importante: en el país la caída es 3.68 por ciento, en Chiapas es de 11.74 por ciento, en Guerrero representa una disminución de 1.17 por ciento y Oaxaca registra un incremento de 2.54 por ciento, sin embargo muy por abajo del aumento del 18.57 que registró entre 2006 y 2007. Esta tendencia se mantuvo en 2009 y en lo que va de de 2010, situación que puede generar presiones muy fuertes a los estados pues no cuentan con la capacidad para ofrecer alternativas de empleo en un contexto de crisis agrícola y recesión económica como es el caso de Chiapas.

Reflexión final

El campo chiapaneco entró en una crisis profunda que se manifiesta en la pobreza de la población, en la baja de la producción y productividad de los cultivos más importantes, así como en el incremento de los flujos migratorios que se manifiestan en el monto de las remesas. En una década (1990-2000) el Producto Interno Bruto per cápita del campo aumentó en sólo 7 dólares. Al acelerado deterioro de los recursos naturales, se añade el problema de la fragmentación de las parcelas y la tendencia a disminuir la productividad. La falta de créditos, la reducción de los subsidios y la escasa inversión pública en infraestructura son factores que se añaden a la ya deteriorada situación de los principales indicadores de desarrollo.

Las organizaciones campesinas de corte agrarista se encuentran en una de las peores etapas frente al agotamiento del reparto agrario y de la vía de las invasiones para conseguir tierras para sus bases. Otras organizaciones que reivindican el ámbito productivo encuentran serias dificultades para obtener recursos frente a la reducción de recursos fiscales, limitándose a conseguir pequeños apoyos en materia de insumos.

Las experiencias generadas en los últimos años en torno a procesos de autogestión de proyectos productivos y venta directa a nichos de mercado de productos orgánicos representan un pequeñísimo avance frente al enorme problema socio-productivo. Por todo lo anterior es pertinente preguntar: ¿Hay futuro para el campo y los campesinos chiapanecos? Si nos atenemos a las tendencias de los últimos años, podemos afirmar que para la gran mayoría de la población que vive del campo el futuro es sombrío. No existen evidencias que la política económica pueda cambiar en el corto y mediano plazos.

A 16 años de la rebelión zapatista, la situación económica, social y política de México no ha cambiado. El zapatismo contribuyó a la crisis del partido de Estado y a la alternancia política. Sin embargo, la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del 2000 no provocó ningún cambio en el país, no profundizó la democracia, no se modificó el modelo económico y tampoco cambiaron las políticas sociales. Por el contrario, se generaron vacíos de poder,

el Partido Acción Nacional (PAN) no supo o no pudo aprovechar el capital político que le significó el triunfo. El Instituto Federal Electoral (IFE), que se había convertido en el garante de la democracia en México, en las elecciones federales del 2006 perdió legitimidad frente a los dudosos resultados en la elección presidencial. Por todo lo expuesto, volvemos a formular la pregunta inicial ¿Qué tenemos que celebrar a 100 años de la Revolución Mexicana?

Bibliografía

- Antón, Eva, (2008), “Sí, pero no”. Análisis de un Proceso de Negociación: el EZLN y la lucha por la autonomía indígena, Tesis para obtener el grado de Maestría en Estudios Sociales y Humanísticos de Frontera, Universidad Autónoma de Baja California Sur, México.
- Ascencio, Gabriel, (2008), *Regularización de la propiedad en la selva Lacandona: un cuento de nunca acabar*, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, colección Selva Negra, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
- Banco de México, (2007), *Informe Anual 2006*, México.
- Banco de México, (2008), *Informe Anual 2007*, México.
- Benjamin, Thomas, (1990), *El camino a Leviatán*, CONECULTA, México
- CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), (2008), *Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México*, México.
- García de León, A., (1994), *Resistencia y Utopía*. Memorial de agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia, editorial Era, México.
- García, María del Carmen, (2005), *Chiapas Político*, colección Lecturas para entender Chiapas, Dirección de Divulgación, Secretaría de Educación Pública, Gobierno de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, México.
- Gutiérrez, S., (2004), *Chiapas histórico. De la Independencia a la Revolución, 1821-1920*, colección Lecturas para entender Chiapas, Dirección de Divulgación, Secretaría de Educación Pública, Gobierno de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, México.
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), (2007), *El Sector Alimentario en México*, Aguascalientes, México.
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), (2008), Fuente: INEGI Censo Agropecuario 2007, IX Censo Ejidal, 2008, Aguascalientes, México
- Ruiz, M. y A. Burguete, (2003), *Derechos y autonomía indígena. Veredas y caminos de un proceso: una década 1988-1998*, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México.
- Sánchez, A., (2007), “Voces en la ruta del zapatismo en Chiapas”, en *Cuarto Poder*, 8 de mayo, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
- Siap-Sagarpa, (2009), *Indicadores básicos del sector agroalimentario y pesquero*, marzo, México.
- Villafuerte, D. y M. C., García, (2007), “veinte años de neoliberalismo en el campo chiapaneco”, en *Anuario CESMECA 2006*, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México,

pp.139-197

Villafuerte, Daniel y Montero, José, 2006, *Chiapas: la visión de los actores*, UNICACH-Interpeace-Juan Pablos Editor, México.

Villafuerte, D., (2001), *Integraciones comerciales en la frontera sur*, Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste-UNAM, México.

Villafuerte, D., (2007), Crisis de la economía campesina y el maíz en Chiapas, ponencia presentada en el seminario de análisis sobre el campo mexicano organizado por la UNORCA, 23 y 24 de abril, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Villafuerte, *et al*, (2002), *La tierra en Chiapas. Viejos problemas nuevos*, Fondo de Cultura Económica, México.

PERIÓDICOS

El Universal, 07 de febrero de 2009, Distrito Federal México.

La Jornada, 6 de enero de 2009, Distrito Federal, México.

Cuarto Poder, 2 de febrero de 2009, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.

La Jornada, 2 de enero de 2009, Distrito Federal, México.

La Jornada, 24 de marzo de 2009, Distrito Federal, México.

Cuarto Poder, 6 de enero de 2009, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.

La Jornada, 10 de febrero de 2009, Distrito Federal, México.

La Jornada, 8 de febrero de 2010, Distrito Federal, México.

PÁGINAS ELECTRÓNICAS

<http://www.terra.com.mx/artículo.aspx?articuloId=359079>

<http://www.siap.sagarpa.gob.mx>

<http://www.inegi.org.mx/inegi/default.asp>

<http://www.banxico.org.mx>